

Vivir

CARLOS GÓMEZ GIL SOCIÓLOGO

«La Administración financia a las grandes ONG porque responden a su política»

El especialista defiende que el marco económico de las entidades dedicadas al desarrollo se fije con criterios de eficacia y sin amiguismos

GERARDO ELORRIAGA BILBAO

El sociólogo Carlos Gómez Gil, licenciado en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de Alicante, es experto en temas de desarrollo y políticas de inmigración, y asesora a instituciones públicas y privadas en programas ligados con la cooperación internacional. Voz crítica en el sector, en su último trabajo, editado por el Centro de Documentación y Estudios Bakeaz de Bilbao, pone en entredicho la fórmula de los microcréditos.

—¿Cómo se encuentra la cooperación española al desarrollo?

—Estamos viviendo el mayor cambio de la ayuda oficial al desarrollo en toda su historia. A lo largo de este año, se ha venido trabajando mucho con una apuesta firme por cumplir los acuerdos económicos del Gobierno porque, sin dinero, no hay políticas. Se ha producido un intento de planificación estratégica, con un primer análisis del cumplimiento nacional de los Objetivos del Milenio, un proyecto que por primera vez en la Historia cuantifica lo que hay que hacer en la lucha contra la pobreza. Entre otras medidas, se ha aprobado la Ley de Deuda Externa y se ha abordado la dimensión de la emigración y el desarrollo con el reconocimiento de la necesidad de una coordinación europea al respecto, programas para la utilización social de las remesas y la búsqueda de fórmulas para abaratar sus costes.

—A pesar de las mejoras experimentadas, el ámbito de la cooperación crítica la escasa cuantía de la ayuda oficial.

—El esfuerzo económico ha sido importante, pero el punto de partida era bajo. España ha sido el penúltimo país donante, tan sólo por detrás de Estados Unidos, con incumplimientos sistemáticos de sus compromisos durante lustros. En 1994, el año de las movilizaciones a favor del 0,7%, se aportaba el 0,28% del Producto Interior Bruto, y en 2004 había bajado al 0,24%. Hablamos de una década perdida, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, puesto que todos los indicadores de eficacia de la ayuda habían caído a los niveles más bajos y nuestra aportación estaba ligada a un cúmulo de intereses espúreos, políticos, económicos y militares. La cooperación, credicia, se ligaba a los países de ingresos medios y altos, los que devuelven los préstamos, y menos a los más pobres o a los programas de



CRÍTICO. Carlos Gómez es experto en temas de desarrollo. / MAITE BARTOLOMÉ

lucha contra la pobreza, la discriminación de género y la defensa de medio ambiente.

—También se cuestiona la pervivencia de los créditos FAD, ligados a la compra de productos y servicios españoles.

—Se trata de uno de esos problemas endémicos de la cooperación, incluso antes de que se pusiera en marcha su estructura administrativa. Fueron creados para potenciar las

exportaciones de las grandes empresas públicas y han constituido el principal elemento distorsionador de la ayuda desde el punto de vista de la calidad, los objetivos y los países beneficiarios. Se trata de la prueba del algodón de la ayuda española, pero hasta ahora no ha habido un acuerdo para encarar este problema. Con ellos, se han pagado estudios de viabilidad a grandes firmas, aportacio-

nes a instituciones como el Banco Mundial, algo esperpéntico, e incluso catástrofes. De los 50 millones prometidos para el tsunami, 44 eran de este tipo.

—¿Qué otros retos tiene la cooperación?

—Que todo el marco de financiación de las ONGD se haga desde criterios de transparencia, eficacia y rigor, que no tiene nada que ver con lo que se ha venido haciendo has-

ta ahora. Nos hemos encontrado con el amiguismo, la vinculación con los responsables políticos de turno a través de las numerosas ONGD que esos mismos responsables han ido creando desde finales de los 90. Es el elemento fundamental que ha primado en las subvenciones a instituciones religiosas conservadoras, entidades directamente vinculadas al Partido Popular.

Falta de ética

—¿Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) juegan un papel testimonial?

—Falta un debate tranquilo sobre esta cuestión. Fueron la respuesta a situaciones de tremendo drama humano y dejación de responsabilidades por parte de los Estados y han crecido en todo el mundo como un elemento más de ese proceso de globalización. En muchos casos, estas organizaciones están siendo utilizadas para imponer un modelo económico y social. Las más grandes instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han creado sistemas de creación directa y financiación de ONGD para impulsar ese objetivo. Mientras tanto, se crean otras, más pequeñas, que tratan de enderezar el rumbo de la economía y hacer valer los derechos de sectores sin voz.

—¿Esta situación se produce también en España?

—Aquí la gente cree que todo lo que hacen las ONGD es bueno, que toda la ayuda del Estado es mala, y que se autofinancian. Me gustaría que se pusieran sobre la mesa los recursos recibidos y la utilización que se ha hecho de los mismos en la lucha contra el hambre. Así veríamos cuáles cumplen y cuáles no.

—¿La autorregulación ética no contribuye a clarificar su función?

—El código ético que han puesto en marcha contempla unos mínimos sistemáticamente incumplidos y no hay capacidad para exigir su cumplimiento. A la Coordinadora de ONGD le costó mucho aprobarlo y, a los pocos días, fue dinamitado por algunas entidades que pusieron en marcha campañas publicitarias sin ningún escrúpulo.

—¿Los informes de la Fundación Lealtad no suponen un cierto control de su funcionamiento?

—Se basa en ciertos parámetros, interesantes, pero insuficientes, y no tiene capacidad coercitiva para actuar de manera firme sobre comportamientos y usos ya no diría reprochables, sino absolutamente ilícitos. Las entidades colaboran de manera voluntaria y la información que facilitan la proporcionan ellas mismas y, en algunos casos, no está verificada.

—¿A qué comportamientos ilícitos